

A propósito de la insurrección zapatista. Notas sobre economía y sociedad en Chiapas, México

María del Carmen García Aguilar¹
Daniel Villafuerte Solís

Introducción

En este fin de época y de milenio, en donde la sociedad pareciera enfrentar no sólo las más violentas luchas ideológicas sino las más trágicas y también violentas luchas por la sobrevivencia biológica y social, profundizadas por el modelo neoliberal, en el estado de Chiapas, México, estalla una insurrección indígena que rápidamente se convirtió en noticia por todo el mundo y provocó no sólo fuertes preocupaciones a los gobiernos de América Latina, como lo evidencian los comentarios vertidos por el presidente de Argentina en la Cumbre Iberoamericana, sino también la simpatía y el apoyo explícito de una multiplicidad de organizaciones sociales nacionales e internacionales.

Chiapas es un espacio en donde su economía y sociedad vive e internaliza procesos que están más allá de sus fronteras territoriales y sociales. Como correas de transmisión, la crisis de las lógicas del *mercado*, del *Estado nacional*, y de las *organizaciones tradicionales de representación política*, se internalizan en sus actores sociales y sus prácticas, los que a su vez también modifi-

¹ Investigadores del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)-UNICACH.

can y le adscriben un sentido específico. La insurrección indígena, y en torno suyo la enorme energía social movilizada, constituye la respuesta a estas lógicas; pero en lo más profundo de sus entrañas, en su imaginario colectivo, y de ahí la paradoja del movimiento indígena, la insurrección les representa la posibilidad de destruir el sistema de relaciones de dominación que le ha impuesto una sociedad local profundamente tradicional y de recuperar elementos y prácticas culturales de sus etnias, como son los valores comunitarios y las demandas de autonomía.

En contraposición a este proyecto de futuro, que cobra impulsos en otros estados de la República, en Chiapas también existen y se gestan proyectos de otros actores sociales que se alejan o se acercan en diversos momentos y grados a las demandas del zapatismo. Chiapas es una sociedad extremadamente desigual, no obstante, en las últimas décadas se vuelve más heterogénea; por los pequeños huecos dejados por una sociedad cerrada, penetraron fuerzas sociales explosivas que han cambiado la fisonomía social y política de la entidad; ello explica la diversidad de proyectos desplegados por las fuerzas sociales locales que de manera diversa y antagónica interiorizan y asimilan los eventos y sus impactos nacionales e internacionales. Concluimos que Chiapas y su sociedad atraviesa por un proceso trágico y doloroso por cuanto su atraso económico, social y político es secular, no obstante, y aunque su desenlace parece estar más allá de sus fronteras, se ha liberado una cuantiosa energía social cuyo reto es encontrar y construir cauces propios para un futuro distinto al que la historia parece condenarle.

En esta serie de ideas, el presente ensayo tiene como propósito fundamental ofrecer una lectura de la sociedad y economía de Chiapas, territorio de donde emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, espacio que potencializa y condiciona el futuro inmediato del levantamiento indígena y sus propuestas de futuro. Su pertinencia, estriba en recuperar cierta medida entre las condicionantes objetivas y subjetivas pues, como en toda coyuntura, se tiende a sobrestimar el carácter potencial de los actores y sus ideologías, valores y registros imaginarios.

I. LA ECONOMIA CHIAPANECA

Chiapas se encuentra en el sureste de México, en el límite con Guatemala, con una extensión aproximada de 75 mil kilómetros cuadrados, tres veces mayor que la república de El Salvador, en el que habita una población de poco más de 3 millones de habitantes. Cuenta con una variedad de regiones que van desde las muy húmedas y calientes, hasta las subhúmedas y templadas, teniendo, además, una meseta fría con bosques de pino-encino. Su riqueza florística es inmensa, constituye uno de los estados que aporta gran diversidad biológica y hace que México forme parte del selecto grupo de 10 países considerados de "megabiodiversidad". El territorio chiapaneco guarda en sus ecosistemas 18 tipos de vegetación, representando más de 8,248 especies registradas hasta la fecha y aún muchas por conocer, como la *Lacandonia Schismatica*. Se registra también el 80% de especies arbóreas tropicales de México; el 33% de reptiles, con importantes endemismos en el estado; el 33% de anfibios y el 80% de las mariposas conocidas en las selvas de México (Gobierno del Estado, 1992).

Una de las grandes paradojas de Chiapas consiste en que la abundancia de sus recursos productivos no se corresponde en absoluto con su distribución. El peculiar desarrollo del capitalismo en este territorio del sureste mexicano se ha venido caracterizando por un atraso significativo en el desarrollo de sus fuerzas productivas y de sus relaciones sociales de producción respecto al desarrollo alcanzado en la economía nacional en su conjunto. En el medio rural y sus entornos socioeconómicos se observa la conformación de regiones altamente diferenciadas dando origen a distintas formas de apropiación y explotación de los recursos naturales y humanos.

A riesgo de simplificar en exceso, podríamos decir que la historia de la economía chiapaneca durante el presente siglo ha sido la de un capitalismo salvaje, que ha operado bajo la lógica de la mayor ganancia posible con el menor esfuerzo. Esto a costa de la "superexplotación" de los recursos naturales productivos y de una fuerza de trabajo que se paga muy por abajo de su valor. Esta

dinámica no sólo es producto del uso y apropiación de los recursos productivos por una burguesía que podríamos caracterizar como pre-moderna, sino también de la política del gobierno federal, que ha contado con la complicidad y sometimiento de los gobiernos locales, para explotar los recursos energéticos (hidrocarburos y electricidad) con el objeto de financiar el desarrollo de otras regiones del país. En términos muy generales podemos distinguir cuatro grandes periodos en la formación económico-social chiapaneca, mismos que configuran dinámicas diferenciadas a nivel regional.

1.- **1880-1900 a 1950.** Se caracteriza por una agricultura típica de plantaciones, orientada al mercado mundial. Su estructura se conforma a partir de cuatro productos: café, hule, plátano y madera, que se localizan en Soconusco y Selva Lacandona. La gran demanda que tienen estos productos en el mercado mundial y las enormes facilidades que ofrece el gobierno mexicano hace que se vaya configurando un proyecto liderado por capitalistas norteamericanos y alemanes, que a través de las actividades de compañías deslindadoras convierten la tierra en un gran negocio. No obstante que la producción más importante se localiza en un espacio muy puntual, como es Soconusco², ésta genera cambios muy importantes en otras regiones del estado, como por ejemplo Los Altos y los Valles Centrales donde se producen los elementos necesarios para dinamizar el proceso productivo: fuerza de trabajo, granos básicos y animales de carga para transportar la producción.

En la producción de café, el capital alemán ejerce la hegemonía; en la producción y comercialización de plátano dominan en orden cronológico la Winberg Banana Co., la United Fruit Co., la Southern Banana Co., y la United Brands, que a través de una relación de "contrato" ejercen la dominación. La producción de madera y de látex chico zapote es dominada por apellidos como Martínez de Castro, Dorengerg, Sala, Bulnes, Troncoso, Cilveti y Romano, sólo la familia Martínez de Castro detentaba cerca de medio millón de hectáreas en todo Chiapas.

² Región que hace frontera con Guatemala y donde la agricultura capitalista ha alcanzado mayor grado de desarrollo.

2.- **1950 a 1970.** Se caracteriza por una serie de cambios que se van gestando en la entidad y que en buena medida son resultado de una mayor integración al centro del país. En el sector agropecuario surgen nuevas actividades que apuntan a diversificar el esquema productivo. Se trata de dos hechos importantes que tienen implicaciones de carácter económico, social y político: de una parte, en la agricultura irrumpen dos actividades de gran importancia, esto es, la producción de algodón y la expansión de la ganadería bovina que sobre todo cobra fuerza significativa en los años sesenta; por otro lado, en la esfera de la industria se perfila un gran proyecto estatal para la construcción de las centrales hidroeléctricas materializado en el "Plan Integral del Río Grijalva". Esto convierte a Chiapas en uno de los principales abastecedores de energía eléctrica del país³.

3.- **1970 a 1982.** En este periodo se producen acontecimientos importantes que marcan puntos de ruptura con respecto a los anteriores. Se trata por una parte de un gran impulso al proceso de integración de Chiapas al centro del país, al tiempo que se fomenta la "modernización" en el campo y se imprimen ciertos cambios en las relaciones de poder, lo que conlleva a la generación de tensiones y enfrentamientos de algunas fracciones de la burguesía agraria regional con el gobierno del estado. En este periodo, se dota a los lacandones de más de 600 mil hectáreas en la Selva Lacandona⁴ y se da mayor importancia a organismos oficiales para actuar directamente en el campo. Por otro lado, se enfatiza en el desarrollo de la industria de energéticos. En este periodo se continúa con el proyecto de las hidroeléctricas e inicia la explotación de hidrocarburos, los cuales van a contribuir de manera significativa al abastecimiento de gas para el consumo nacional y las exportaciones de crudo. El fortalecimiento de la producción agrícola comercial durante este periodo profundizó la desigualdad que ya se venía observando, cuestión que se va a expresar en un

³ Actualmente, Chiapas es el estado más importante en la generación de energía hidroeléctrica y su contribución a la producción de energía del país es del orden del 25%.

⁴ Resolución Presidencial de fecha 26 de noviembre de 1971 publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 6 de marzo de 1972 que confirmó y tituló 614,321 hectáreas a favor de la comunidad Lacandona.

mayor número de campesinos sin tierra y la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada. Estos fenómenos contribuyen a que en los años setenta surjan diversas movilizaciones sociales.

4.- 1982 a 1993. Durante esta última década ocurren fenómenos de gran envergadura. En el contexto nacional estamos frente a una severa crisis: desempleo, inflación, deuda externa, déficit público, desequilibrio externo, etc. En Chiapas comienza a observarse un proceso recesivo en varias ramas de la economía, mismo que constituye el preludio a la gran crisis social y política que hoy vive la entidad. La plataforma de producción de crudo comienza a descender rápidamente, de un 23 por ciento que aportaba a la producción nacional en 1980 pasa a sólo un 3 por ciento en los años noventa, sin embargo la producción de gas y azufre mantiene una contribución sustantiva. Además, muchos de los proyectos de exploración y perforación quedan suspendidos ante las restricciones del gasto público, lo cual provoca el cierre de fuentes de trabajo, este es el caso de las regiones norte, pero sobre todo a la llamada región de Marqués de Comillas, situada en la Selva Lacandona⁵, donde existen evidencias de grandes reservas de hidrocarburos.

A partir de la caída de la producción petrolera la estructura del producto interno bruto se modifica sustancialmente. Así, en 1992 el PIB se estructura de la siguiente manera: 27.4% corresponde al sector agropecuario, 8.6% a actividades mineras, 6.3% a manufacturas, 12.7% a construcción, 22.8% a comercio y el resto (22.2%) a otras actividades del sector terciario⁶. Como se puede observar, el eje de la dinámica económica y en gran medida sociopolítica sigue siendo el sector rural, en tanto que más del 50% de la población económicamente activa se encuentra en este

⁵ La revista *Financial World* afirmó recientemente que México podría poseer las reservas petrolera más grandes fuera del Golfo Pérsico y la Unión Soviética. Esta afirmación adquiere gran significado por cuanto que, según el estudio realizado por el Ing. Bernard Grossing de Estados Unidos, se estima los recursos potenciales de México en 700 mil millones de barriles en el área de Campeche y entre 20 y 30 mil millones en Chiapas, en la frontera con Guatemala (*El Financiero*, 3 de septiembre de 1990).

⁶ Bancomer, 1992. *Panorama Económico*, 4o. Bimestre, México.

sector. El carácter de la movilidad laboral en Chiapas se circunscribe fundamentalmente a rutas interregionales, generando con ello una presión poderosa sobre los recursos y el empleo.

El eje del sector agropecuario está constituido por tres actividades, maíz, café y ganadería bovina. En el conjunto de la agricultura chiapaneca el maíz ocupa el primer lugar, abarca 710 mil hectáreas —66% de la superficie total cosechada— y su producción significa el 56% del volumen generado por los doce cultivos más importantes del estado; el valor que genera es el más alto del sector agrícola y es la actividad que absorbe mayor fuerza de trabajo⁷. El café es el segundo cultivo en importancia, con poco más de 243 mil hectáreas y cerca de 83 mil productores, en su mayoría minifundistas; en torno a esta actividad se establecen un complejo de relaciones donde destaca el flujo de mano de obra predominantemente guatemalteca y cuya cifra oscila entre 40 y 70 mil trabajadores al año. La ganadería bovina ocupa alrededor de 3.5 millones de hectáreas, es una actividad básicamente extensiva con bajos niveles de producción y productividad. Recientemente, en el Soconusco, frontera con Guatemala, cobran importancia otros cultivos tropicales como plátano, mango, marañón y palma africana.

El carácter agrario de la sociedad chiapaneca lo convierte en terreno fértil para las movilizaciones sociales ante situaciones de crisis. Esto es lo que ha venido ocurriendo al finalizar los ochenta y comienzos de la presente década, donde se observan con gran nitidez los efectos de las políticas neoliberales y la baja de los precios internacionales de los productos agropecuarios, que aunado a políticas locales como la "veda forestal" y la postergación de muchas demandas, sentaron las bases materiales para el estallamiento del conflicto actual. En este sentido, cabe mencionar los impactos que en el marco de las organizaciones de los productores del sector social del Soconusco provocó las medidas gubernamentales aplicadas en el sector cafetalero⁸.

⁷ López, Jorge y Villafuerte, Daniel, 1992. "La producción de maíz en Chiapas ante el Tratado de Libre Comercio", en: *El Sector Agropecuario Mexicano frente al Tratado de Libre Comercio*, CIESTAAM-UNAM-Juan Pablos Editor, México.

⁸ Se aplicaron a partir de la cosecha 1989/90, casi paralelo a la eliminación del

Los cafecultores del sector social contaban con dos canales organizativos: las Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) que eran instancias organizativas en torno a los programas del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) y las organizaciones articuladas a la CNC: cuatro uniones de ejidos, una sociedad cooperativa y dos sociedades de solidaridad social⁹. Las primeras llegaron a alcanzar la cifra de 361 UEPC con más de 11,550 socios y las segundas llegaron a contar en conjunto con poco más de 6,000 socios, lo que significaba que todo el microcosmos social productivo cafetalero estaba prácticamente organizado.

Sin embargo, las medidas gubernamentales en el sector cafetalero provocaron la disolución de las UEPC y, ante la incapacidad de la CNC en sus distintos niveles jerárquicos, la pérdida efectiva y real de sus organizaciones locales. Si en el ciclo 1989/90 estas organizaciones en conjunto captaron el 20% de la producción estimada de sus socios, para el ciclo siguiente el acopio representó apenas el 6%. En los siguientes ciclos, ya no se reporta acopio alguno (García y Pontigo, 1993). Este es un ejemplo que se repite en otras regiones cafetaleras y en general para otros productos comerciales y básicos de la entidad chiapaneca.

A medida que las políticas de ajuste y cambio estructural¹⁰ se recrudecen y de que los sectores económicos y sociales de

sistema de cuotas de exportación por parte de la OIC, y están referidas a: la supresión de los permisos previos para la exportación, la liberación del mercado interno del grano, la eliminación del precio mínimo al campo, eliminación de los recuentos de existencias y la obligación del abasto interno industrial. Posteriormente se decide la venta y transferencia de la planta agroindustrial del INMECAFE, institución que queda reducida a las tareas de investigación básica y aplicada, de asistencia técnica y de representación internacional (García y Pontigo, 1993).

⁹ Son las Uniones de Ejidos Lázaro Cárdenas, Huixtla, J. Sabines y Progresista de Acacoyahua; la Sociedad Cooperativa Sierra-Soconusco y las Sociedades de Solidaridad Social Independencia 87 y Enrique Martínez H.

¹⁰ "Por ajuste estructural se entiende de hecho la forma en que las economías nacionales deben adaptarse a las nuevas condiciones de la economía mundial, caracterizadas tanto por cambios tecnológicos que demandan más flexibilidad dentro de las empresas y una mayor descentralización de la producción, como por mercados más competitivos e inestables". Son tres sus objetivos: de tipo financiero, de ajuste macroeconómico y de ajuste microeconómico. Entre las medidas para la consecución

Chiapas empiezan a pagar la factura, el panorama sociopolítico tiende a vulnerarse. Importantes sectores de la sociedad regional no se identifican plenamente con las medidas asumidas por el gobierno; lo importante de estos fenómenos es que ahora, esta no identificación *coyuntural* con el gobierno central y sus decisiones, involucra no sólo a las grandes mayorías empobrecidas de Chiapas, sino también a un sector importante de los grupos de poder económico para quienes la única medida positiva fueron las reformas al Artículo 27 Constitucional¹¹.

El recrudescimiento de las políticas de ajuste y reestructuración caen en un terreno social en donde las alternativas económicas casi restringidas a la actividad primaria enfrentan una severa crisis. En Chiapas, las *políticas neoliberales* tienen, entre otras, las siguientes expresiones: reducción de la inversión pública federal para el desarrollo rural, mismo que en 1991 sólo significó el 8.7% de lo ejercido en 1982; reestructuración y depuración de los sujetos de crédito por parte de la banca de desarrollo, que significó que entre 1987 y 1992, el monto de créditos asignados por el Banrural a los cinco cultivos más importantes pasara de 1,700 millones de pesos (viejos) a sólo 285 millones de pesos (viejos), siendo los más afectados maíz y frijol; baja tendencial de los precios cultivos: el valor de la producción del maíz, del café y de la carne bovina, entre 1987-1992 observan una reducción del 23, 84 y 52.2% respectivamente (Villafuerte y García, 1994).

La crisis, a su vez, se expresa en una baja tendencial de los precios de los principales cultivos y productos del campo (en el

del segundo objetivo destacan la de reducir el gasto del gobierno (especialmente el gasto social y en infraestructura), disminuir o eliminar subsidios, contraer la oferta de dinero. Se trata en todo caso de un giro a favor de la desregulación, del libre mercado, de la privatización y de la internacionalización (Tironi y Lagos, 1990: 40).

¹¹ En este sentido es importante señalar algunos elementos que confirman esta contradicción: 1) el abandono del gobierno al sector cafetalero [particularmente pequeños y medianos empresarios] ante la peor crisis sufrida, después de la recesión de 1929, como consecuencia de la ruptura de las cláusulas económicas de la Organización Internacional del Café (OIC), en julio de 1989; 2) las restricciones crediticias y la política de apertura comercial, sobre todo con Centroamérica, que afectó drásticamente al sector de los ganaderos; 3) la aplicación de una política forestal que condujo al cierre de todas las empresas del ramo, en algunos casos se llegó al encarcelamiento de importantes empresarios (Villafuerte, 1994).

periodo 1987-1992 el valor de la producción de maíz se reduce en 23%, el café en 84% y la carne bovina en 52.2%). La caída de los precios del café fue dramática: de casi 180 dólares las 100 libras en 1986 a sólo 60 dólares en 1992 (Betancourt y López, 1993). La ganadería por su parte, experimenta el agotamiento de su modelo extensivo: entre 1982 y 1993 el hato ganadero se reduce en más de 600 mil cabezas. Entre 1988 y 1989 la producción de carne decreció en 4.7 por ciento y entre 1989-1990 registró una caída del 40 por ciento (Villafuerte y García, 1993). Finalmente la producción de maíz observa una contracción en los rendimientos y volúmenes de producción (Villafuerte y García, 1995).

Dos elementos más que conforman el cuadro de crisis de la economía chiapaneca son: el agotamiento de la estrategia del reparto agrario vía terrenos nacionales y el decreto de veda forestal ofrecida como *divisa política* al expresidente Salinas por el entonces gobernador González Garrido, cuyas consecuencias fue la desaparición de la industria forestal y la prohibición a las comunidades de explotar sus recursos forestales. La proyección hacia el exterior de un México preocupado por la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, llevó a descuidar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales del país: la adhesión de México al protocolo de Montreal para eliminar las emisiones que afectan la capa de ozono, la firma del Tratado Internacional para la Protección de las Especies en Peligro de Extinción y el Convenio de Bruselas para regular el tráfico fronterizo de desechos contaminantes, así como el liderazgo que en todo momento asumió el gobierno mexicano en los foros internacionales como **La Cumbre de Río** y previo a ésta la reunión internacional "Problemática del conocimiento y conservación de la biodiversidad"¹², celebrada en Yaxchilán, Chiapas, y la posterior

¹² En el marco de esta reunión, celebrada el 13 de febrero de 1992 en el centro ceremonial de Yaxchilán, a la cual asistieron distinguidas personalidades como José Sarukán, rector de la UNAM; Peter H. Raven, representante de Missouri Botanical Garden; Arturo Gómez Pompa, de la University of California Riverside; y Russell A. Mittermeier, presidente de Conservación Internacional, Salinas de Gortari se comprometió a la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a aumentar en 55 mil hectáreas a la reserva de la biosfera "Montes Azules, y a invertir el equivalente a diez millones de dólares en conservar y desarrollar la selva Lacandona (*La Jornada* 16 de febrero de 1992).

Declaración de Copán suscrito por los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Belice, constituyen evidencias del peso asignado a la política forestal y ambiental hacia el exterior. (Villafuerte, 1994).

El problema de la tierra

Uno de los problemas que han emergido con gran fuerza, a raíz del conflicto armado, ha sido la demanda por la tierra. Esto evidencia el carácter que asumió la reforma agraria en Chiapas. En efecto, la historia agraria ha tenido un peculiar desarrollo que merecería un análisis pormenorizado, a nivel de regiones; sin embargo por razones de espacio no entraremos en mayores detalles, basta para nuestros propósitos señalar algunas cifras de carácter indicativo.

Datos obtenidos de la Secretaría de Reforma Agraria revelan que entre 1917-1940 las tierras concedidas en dotación y ampliación ascendían a 584,132 has, amparadas por 406 resoluciones presidenciales. Sin embargo, el número de ejecuciones por mandato presidencial fue de apenas 172 con una extensión de 252,132 has, el 3.4% correspondió a tierras de riego, el 20.57 a tierras de labor y, el resto a tierras de agostadero, monte e indefinidas.

Datos censales de 1970 revelan el grado de concentración de la tierra en Chiapas:

- Los predios de hasta 10 hectáreas representaban el 33.3% del total de predios y contaban con apenas el 0.5% de la superficie total.
- Los predios de 10.1 a 25 hectáreas representaban el 16.6% del total de predios y contaban con el 1.8% de la superficie total.
- Los predios de 1000.1 a 5000 hectáreas representaban el 3% del total de predios y concentraban el 37.7% de la superficie total.

- Los predios de 5000.1 a 10,000.0 hectáreas representaban el 0.2% del total de predios y concentraban el 18.8% de la superficie total.

En síntesis, se puede observar que mientras el 96.8% de los predios contaban el 43.5% de la superficie, sólo el 3.2% de los predios, que correspondieron a los mayores de mil hectáreas, concentraban el 56.5% de la superficie total.

La información disponible para 1980 permite señalar que en 10 años no se produjeron cambios sustanciales en la estructura de la tenencia de la tierra. De esta manera tenemos los siguientes datos:

- Los predios de hasta 5 hectáreas representaron el 22.8% del total de predios y únicamente contaron con el 4.2% de la superficie.
- Los predios de 100.1 a 1000 hectáreas representaron el 3% del total de predios y concentraron el 37.3% de la superficie.
- Los predios de 1000.1 a 2500 hectáreas representaron el 0.1% del total de predios y contaron con el 7.5% de la superficie.
- Los predios de más de 2500 hectáreas representaron menos del 0.1% y concentraron el 3.1% de la superficie.

Datos más recientes indican que en 1993 casi el 52% de las tierras estaban en manos de campesinos e indígenas. De los 7 millones 521 mil has. que tiene la entidad, 3 millones 15 mil hectáreas pertenecían a ejidos, y 893 mil a comunidades, lo que nos arroja un total de 3 millones 908 mil hectáreas; en tanto que la propiedad privada, definida en estricto sentido jurídico, detentaba casi 2.5 millones de hectáreas divididas en 18,570 predios, con un promedio de 134.6 hectáreas por unidad de superficie. De estas cifras se desprende que si bien no existen ya, por lo menos en las estadísticas oficiales, las grandes propiedades como en el año de

1970, existe una estructura agraria desigual cuyas expresiones regionales son aún mayores, lo que exigiría replantear el sentido de la reforma agraria.

El problema de la tierra si bien ha sido una de las principales demandas en el actual conflicto, consideramos que no es el factor fundamental. En general, puede decirse que se trata más bien de un problema de producción y productividad, de generación de empleos bien remunerados, de organización y de acceso a los mercados de productos en condiciones favorables para los que tienen menos recursos productivos. En una hipótesis extrema, diríamos que aunque toda la tierra pasara a manos de los campesinos, si los demás factores se mantuvieran constantes, el campo y los productores permanecerían en las mismas condiciones de las de ahora. En otras palabras, la tierra tiene que crecer hacia arriba mediante la incorporación de tecnología y recursos que posibiliten elevar la productividad de la mano de obra, pero además en el mediano y largo plazos, las expectativas del desarrollo de Chiapas no pueden fincarse exclusivamente en el campo.

Distribución del ingreso

En esta década de crisis, la población chiapaneca se incrementó en un millón 125 habitantes; pasa de casi 2.1 millones en 1980 a 3.2 millones en 1990. En su dimensión social, los actores individuales y colectivos viven un recrudecimiento individual y colectivo en la privación de sus identidades y en entredicho su supervivencia biológica y social. Los efectos de la crisis económica ha tenido efectos dramáticos: para las regiones de Los Altos y la Selva, se ha traducido en mayores tasas de subempleo y contracción en los flujos de emigración; para regiones como la Sierra y Soconusco, en el abandono de parcelas por parte de productores que emigran en busca de empleo en el norte del país y los Estados Unidos. Las otras regiones de Chiapas, tampoco escapan a estos impactos, observándose una reducción dramática en los niveles de ingreso de las familias pobres, de tal suerte que entre 1980 y 1990 la población económicamente activa que recibió menos de un salario mínimo se incrementó en 122 por

ciento (Villafuerte y García, 1994).

El crecimiento demográfico y la permanencia de un patrón desigual en la distribución de la riqueza han venido a deteriorar aun más las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad chiapaneca. Así, por ejemplo, de los 854,159 habitantes considerados por el censo de 1990 como población ocupada, 162,323 (19%) no recibieron ingreso y 340,659 (40%) obtuvieron menos de un salario mínimo, este último segmento aumenta en el sector primario de la economía ya que de las 498,320 personas ocupadas, 249,365 (50%) no llegaron a obtener el salario mínimo (Villafuerte y García, 1994).

Entre 1980 y 1990 se agudiza el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. La PEA en situación de extrema pobreza, es decir, los que no recibieron ingresos más los que ingresaron menos de un salario mínimo, se incrementó en números absolutos en casi 60 mil, por lo que en el último año este grupo llegó a constituirse por 523,100 personas, esto es, casi el 60 por ciento de la PEA total. De manera particular, el segmento de PEA que obtuvo menos de un salario mínimo registró un aumento absoluto de 155 mil personas, es decir, 83.6 por ciento en relación con 1980. Por su parte, el grupo de PEA con ingresos superiores o iguales al salario mínimo creció de manera sustantiva al registrar poco más de 200 por ciento; no obstante, en relación con la PEA total este segmento representó en el último año solamente 36 por ciento (Villafuerte y García, 1994).

II. REALIDADES Y FICCIONES DE LA SOCIEDAD CHIAPANECA

En Chiapas, el sustrato de las sociabilidades deviene del espacio rural: la comunidad indígena, la finca, el rancho, el ejido; en el marco de sus antagonismos, los actores colectivos, como grupos de hombres con intereses un tanto definidos, construyen sus imágenes, representaciones, símbolos y signos, por un lado, en torno a mitos, magias, revelaciones milenarias y mensajes libertarios, son los indígenas y campesinos. Por otro lado, en torno a discursividades que tienen que ver más con sentimientos de

origen y pertenencia al mundo de los conquistadores, de los acumuladores de capital, son los finqueros, los empresarios agrarios y grandes comerciantes.

En torno a estos extremos societales, se van engranando otros actores colectivos que, de acuerdo a sus determinaciones sociohistóricas, se tocan o se repelen con uno u otro extremos. Y por encima de todos ellos, el *Leviatán*, con una Constitución, un sistema de actores e instituciones políticas para, en un mundo de hombres libres, de *ciudadanos*, garantizar la paz y el orden social. Ficción y realidad se engarzan y las fuerzas sociales se despliegan dialécticamente, configurando estructuras de poderes regionales y locales, con alianzas que culminan parcial y temporalmente en la reproducción del sistema o su contrario.

El proceso de corporativización

A partir de la segunda mitad de los treinta, Chiapas como el conjunto de las entidades federativas, observa un punto de inflexión significativo para su sociedad y sus proyecciones futuras. El Estado mexicano impulsa y consolida los fundamentos, engranajes y mecanismos de una estructura corporativa institucional en donde prácticamente toda la sociedad, desde el "pueblo" o "las masas", hasta los "grupos de interés" quedarán, de manera obligatoria o cuasi-obligatoria, reclutados en grandes organizaciones nacionales. Las nociones de *sociedad civil* y *ciudadanía* activa y crítica no logran despegar; se diluyen y persisten como meras referencias abstractas frente a una discursividad ideológica emanada de los idearios de una *Revolución* en donde lo social y lo político, pueblo y gobierno, observan no sólo una plena identificación de intereses sino que éstos tienden a encuadrarse en un único partido: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido de Estado.

Recuperando la historia de Chiapas y atendiendo a sus condiciones concretas que observan un momento de confrontación entre los grupos económicos locales y el gobierno nacional, esta identificación de intereses, en su momento, resultaba progresista. Frente a una Confederación Campesina y Obrera de Chiapas

(CCOC) defensora de los intereses de los hacendados y no de los trabajadores, la Confederación Campesina Mexicana (CCM) creada en 1934 por el gobierno de Cárdenas, constituyó el espacio natural que cobijó inicialmente a los movimientos opositores dirigidos por la Cámara del Trabajo de Chiapas, de tendencia comunista, o agrupados en la Liga de Comunidades Agrarias de Chiapas (Louis, 1990: 282). Es precisamente la formación del Sindicato de Trabajadores Indígenas, en 1936, la primera referencia empírica de una afiliación corporativa de carácter nacional que pronto cubriría a todas las organizaciones sociales de la entidad.

En sustitución de la CCOC, en 1937, se crea la Confederación Obrera y Campesina de Chiapas, formada por dos filiales subordinadas: la Confederación Obrera, que a fines de 1938 se integrará a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Campesina, que en el mismo año se convierte oficialmente en Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de Chiapas, integrada a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Con esta última, constituida en agosto de 1938¹³, los campesinos pasan a convertirse en un leal agente político del Estado. Para 1939 la Confederación Obrera tenía registrados a más de 271 sindicatos con una filiación de cerca de 33 mil miembros, y la Liga de Comunidades Agrarias representaba a las autoridades ejidales y a los comités ejecutivos agrarios de las comunidades solicitantes de tierras (Louis, 1990: 291).

Pese a que en Chiapas el sector más importante del PRI lo constituyó el sector campesino, y de ahí el carácter estratégico de esta agrupación corporativa, no fue menos importante el sector popular y las capas medias agrupadas en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), hoy UNE Ciudadanos en Movimiento. Esta corporación, creada en 1943, tenía entre sus agremiados a las organizaciones del sector popular agrupados en 10 ramas socioprofesionales: trabajadores al servicio del Estado, miembros de cooperativas, agricultores, pequeños industriales,

¹³ Al acto de constitución de la CNC asistieron representaciones de las 32 delegaciones de las Ligas de Comunidades Agrarias de las entidades del país, contándose con la presencia de Lázaro Cárdenas y del presidente del CEN del PRM.

pequeños comerciantes, profesionistas e intelectuales, jóvenes, mujeres, artesanos y trabajadores no asalariados, es decir, todos aquellos que no pudieran encuadrarse en los sectores obrero y campesino.

Las organizaciones de la iniciativa privada tampoco quedaron al margen del corporativismo. En este sentido, en 1936 se promulgó la Ley de Cámaras de Comercio e Industria en donde se define a éstas como *órganos de colaboración con el Estado* y se insta a los propietarios de comercios e industrias a pertenecer a la Cámara Nacional de Comercio e Industria. La formación de cámaras de comercio en Chiapas data de 1920 y 1921, y aunque existió compatibilidad de intereses con el gobierno estatal, su inserción corporativa al partido de Estado se da en 1938 cuando la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Tuxtla Gutiérrez, se integra a la Cámara Nacional (Louis, 1990: 292). Pese a que formalmente el sector empresarial no está afiliado directamente al PRI, en la práctica siempre han constituido un sector presente en la primera línea de la actividad partidaria.

El sector de propietarios agropecuarios y sus organizaciones, han tenido un peso importante en la historia de la economía y sociedad chiapanecas; sus conflictos con el gobierno central y la forma que asume la resolución de éstos explica gran parte de la historia del poder político en la entidad. En 1909 se funda en Tuxtla Gutiérrez la *Cámara Agrícola de Chiapas*, como una organización de terratenientes con vínculos muy estrechos con el gobierno estatal¹⁴; en 1908 los finqueros alemanes crean la *Unión Cafetalera del Soconusco* con los propósitos de establecer criterios uniformes en la fijación de las condiciones laborales de sus trabajadores (Louis, 1990:124); y en lo que respecta a los ganaderos, Fernández y Tarrío (1986) reportan para 1934, la existencia de una cooperativa de ganaderos en los Cuxtepeques.

¹⁴ Louis Benjamín reporta que esta organización se forma como respuesta a la crisis económica; con el objetivo de proporcionarse ayuda mutua y hacer presión política para la consecución de apoyos gubernamentales. Indica que publicaba un boletín que informaba sobre técnicas agrícolas y promovía la expansión de nuevos cultivos en los Valles Centrales, de donde pertenecían la mayor parte de sus socios (Louis Benjamín, 1990: 124).

La inserción corporativa de los productores del sector privado se da con la promulgación de la Ley de Asociaciones Agrícolas en 1932. Esta determina la organización de los productores en *asociaciones locales por producto* (A.A.L.), que constituyen la instancia básica para conformar las *uniones regionales*, mismas que devienen en *uniones nacionales*. De acuerdo a esta Ley, el Estado tiene la posibilidad de intervenir en la dinámica de las asociaciones o uniones, pues a éste le compete la planificación, la regulación y el fomento de las actividades productivas de este sector.

Bajo el amparo de la Ley de Asociaciones Agrícolas se crean en Chiapas las primeras asociaciones de ganaderos; no obstante, es con la expedición de la *Ley de Asociaciones Ganaderas*, en abril de 1936, momento en que quedan establecidas las bases jurídicas para la creación de la *Confederación Nacional Ganadera* (CNG)¹⁵, que se da un proceso acelerado de organización de los ganaderos chiapanecos. La Unión Regional de Chiapas se funda el 19 de octubre de 1939 integrada por 18 asociaciones ganaderas locales. Para 1974 tiene registradas tres uniones: Unión Ganadera Regional de Chiapas con 43 asociaciones locales y 7,717 socios productores de carne; la Unión Ganadera Regional de la Costa de Chiapas con 14 asociaciones locales y 1,307 socios y, la Unión Ganadera Regional de Catazajá (hoy del Norte) con 4 Asociaciones Locales y 793 socios. Datos más recientes, indican un incremento en el número de asociaciones locales: 54 para la Regional de Chiapas; 15 para la Costa de Chiapas y 6 para la Zona Norte.

Un papel muy destacado lo ocupa la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, creada en 1946, hoy Confederación Nacional de Propietarios Rurales. En Chiapas cuenta con asociaciones locales en la mayoría de sus municipios, afiliando además a las uniones estatales de productores. Esta confederación, afiliada

¹⁵ La Asamblea Constitutiva de la Confederación Nacional Ganadera se realizó en septiembre de 1936, destacando como objetivos sustanciales de ésta, la organización de sus representados en las organizaciones locales y regionales contemplados en la Ley respectiva; organizar y mejorar las explotaciones pecuarias con mejores técnicas; y, al igual que con las uniones nacionales de productores agrícolas, la de ser una *organización de consulta y de colaboración con el Estado* (Ley General de Asociaciones Ganaderas, 1936).

al PRI, fue el espacio político que permitió, con excepción de los últimos años del gobierno de Echeverría, dirimir con éxito los conflictos entre gobierno y propietarios rurales. En Chiapas, esta confederación junto con la CNG han constituido para los propietarios privados, los espacios más importantes de defensa a las afectaciones sufridas por las políticas agraristas del gobierno mexicano.

Así, desde mediados de los años treinta, y hasta fines de la década de los sesenta, los campesinos, los obreros, los sectores populares, profesionistas, clase media y los sectores de la iniciativa privada como la dimensión patronal de la sociedad civil chiapaneca, son incorporados al partido de Estado, el PRI, más que por decisión individual, a través de sus respectivas organizaciones corporativas. En síntesis, en Chiapas, al igual que en el resto del país, la articulación entre Estado y Sociedad se va a caracterizar por la preeminencia de un modelo corporativo de Estado¹⁶, sustentado por una estructura social de grandes colectividades estabilizadas y diferenciadas; incorporados al PRI a través de organizaciones nacionales formales como las federaciones campesinas (CNC), obreras (CTM, CROM), populares (CNOP), de empleados públicos (FSTSE y otros sindicatos) y patronales (FNPP, CNG, CANACINTRA, CONCANACO); por un sistema de demandas y conflictos de carácter distributivo de la riqueza social generada; por una discursividad ideológica sustentada en principios de desarrollo económico con distribución, de soberanía nacional, paz y orden social, principios todos vertebrados por el Estado nacional.

El despertar de la sociedad civil

La década de los setenta constituyó un periodo crucial para Chiapas en cuanto a la convergencia de un conjunto de factores y

¹⁶ "El corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les concede un explícito monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos" (Schmitter, 1992: 46).

procesos económicos, sociales y políticos, que van a permitir que la población mayoritaria perciba y haga suya la posibilidad de un proyecto de futuro distinto a la de sus antepasados inmediatos.

A partir de estos años, Chiapas es receptor de un número inusitado de agencias del gobierno federal, producto del crecimiento horizontal de la administración pública nacional durante el gobierno de Echeverría. La presencia de las nuevas delegaciones de las agencias gubernamentales de la administración central, significó no sólo una disminución del gobierno estatal y sus agencias de desarrollo, sino también, la presencia de grupos importantes de profesionistas y técnicos que habrían de imprimir, en no pocos casos, una lectura propia a los problemas de la entidad. En esta década, las regiones indígenas, sobre todo la región de Los Altos de Chiapas, van a ser objeto de importantes proyectos de desarrollo socioeconómicos con la participación, incluso, de organismos internacionales como la UNICEF, UNESCO, OMS y FAO. Al Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas (PRODESCH), le sigue el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) y el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) en el gobierno de López Portillo (García y López, 1990).

Durante los setenta, poblaciones campesinas e indígenas se organizan y se movilizan para hacer frente a las negativas gubernamentales a sus demandas de reparto agrario; las respuestas del gobierno estatal y de las autoridades municipales no se dejan esperar y se orientan en gran medida hacia la defensa de los propietarios generándose una situación de violencia y represión. Empieza a ser evidente también la presencia de organizaciones campesinas de carácter nacional que permiten el asesoramiento, la difusión y el seguimiento de la trayectoria de los conflictos y movimientos campesinos que tienen lugar en el espacio local. La intervención federal en la resolución de los conflictos entre campesinos e indígenas y propietarios rurales cobra cada vez mayor importancia con los subsecuentes problemas y contradicciones entre éste y las élites de poder local.

Asimismo, en los setenta entran en escena los conflictos entre la federación y grupos sociales que son afectados por las políticas

económicas y las decisiones asumidas en torno a Chiapas por parte del gobierno central, tales como el decreto de dotación de más de 600 mil has a los Lacandones y paralelo a ello, la continuación de la política de colonización, como estrategia para frenar las presiones a la propiedad; la construcción de presas hidroeléctricas y con ello las inundaciones de importantes zonas agrícolas; las afectaciones de suelos y ríos por parte de PEMEX. Cabría aquí, incluir también las afectaciones de fincas por parte de la federación durante el gobierno de Echeverría, momento en que los propietarios rurales afectados directa o indirectamente observan un cambio de actitud y de prácticas frente a las decisiones gubernamentales.

No menos importante va a ser la presencia de la Iglesia Católica en la línea de la "*Opción por los Pobres*". La Diócesis de San Cristóbal inicia pocos años antes el trabajo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y la pastoral indígena. En los setenta este trabajo es iniciado también por la Diócesis de Tapachula, en la Sierra Madre habitada por campesinos e indígenas¹⁷. Un evento, que refleja la importancia que el gobierno concedía en ese momento al trabajo pastoral indígena realizado por la Diócesis de San Cristóbal, es sin duda alguna el *Primer Congreso Indígena de Chiapas Fray Bartolomé de Las Casas*¹⁸, organizado, a petición expresa del entonces director de Asuntos Indígenas en el estado, por el Dr. Samuel Ruiz García, Obispo de San Cristóbal, y su equipo de colaboradores en la base indígena.

Chiapas llega a la década de los ochenta y su dinámica económica y sociopolítica está llena de contradicciones y complejidades. Son muchos y variados los fenómenos y procesos externados en los diversos planos de la realidad chiapaneca los

¹⁷ En Chiapas, la Iglesia Católica está estructurada en tres diócesis: la de San Cristóbal de Las Casas que comprende 41 municipios de las regiones Altos, Selva, Fronteriza y Norte con una población de poco más de un millón de habitantes; la de Tuxtla Gutiérrez que comprende 42 municipios de las regiones Centro, Norte y Altos, con una población similar a la diócesis de San Cristóbal; y la diócesis de Tapachula que comprende los municipios de las regiones Soconusco, Costa, Sierra y Fronteriza, con una población de casi 880 mil habitantes (Obispado de Tuxtla, 1994).

¹⁸ Se realizó en la ciudad de San Cristóbal entre el 13 y 15 de octubre de 1974 como parte de un homenaje a Fray Bartolomé de Las Casas en vísperas de los 500 años de su nacimiento (Morales, 1991: 242).

que van a permitir explicar la emergencia de un modelo societal en donde las relaciones entre lo social y lo político cobra nuevas formas; inaugura la irrupción de actores tradicionalmente marginados de las decisiones del mundo de lo público y pone en entredicho una "alianza social" que le fue funcional a las élites económicas y a los gobiernos y sus burocracias en los niveles federales y estatales.

Primero de manera lenta, después bajo irrupciones violentas de descontento social y finalmente, dentro de su propia lógica, arrasada por el carro del neoliberalismo, se corrobora el proceso de erosión de un modelo de hacer política sustentando en un esquema de representaciones sociales —el sistema corporativo de Estado— que durante más de medio siglo se encargó de amortiguar y canalizar las demandas de sus agremiados en un marco de negociación con el Estado a cambio de dirigir el potencial político de sus bases al fortalecimiento de éste; se estructuró así, una dialéctica de premios, concesiones y castigos, en donde los premios y concesiones recayeron en los miembros de las élites dirigentes y los castigos inevitablemente en las bases. Engendradas en el seno del Estado mexicano estas organizaciones se desarrollaron con éxito, se constituyeron en un capital político y sirvieron de puntales del régimen revolucionario, dispuestos en todo momento a cercenar y apagar todo brote e iniciativa de independencia dentro y fuera del sistema corporativo.

En Chiapas, el mundo corporativo de la CNC la organización más grande que propició estabilidad al sistema político con votos garantizados al PRI, se mostró como un aparato gastado, sin credibilidad y con la misma discursividad ideológica de las promesas de solución a futuro. Las modificaciones al Artículo 27 Constitucional cortan de tajo la base ejidal que le permitió aglutinar al sector más importante del mundo rural chiapaneco. Aún cuando la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC en la entidad, afirma contar con 110 comités municipales y albergar en su seno a la gran mayoría de las organizaciones de productores del sector social (uniones de ejidos, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social, unidades agrícola-industrial de la mujer, etc.), la dinámica

social en el agro confirma que estas entidades organizativas locales son, en la mayoría de los casos, más de forma y de membrete; y aunque todavía ejercen un importante papel en lo político, es innegable, a veces en el seno mismo de estas figuras asociativas, la gestación de diversas fuerzas sociales centrífugas cuyo capital político, discursivo y social compiten de manera exitosa con las organizaciones corporativas.

III. LOS NUEVOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD Y DE LUCHA POR EL PODER

Si tuviéramos que dar una fecha como punto de inflexión de la geografía sociopolítica de Chiapas diríamos que es a partir de los años setenta el momento en que se empieza a percibir la importancia del poder de los actores sociales marginales y sus instancias organizativas: comienza un lento pero real y efectivo proceso de desplazamiento de las redes corporativas, primero por su ineficacia y después como producto de los propios cambios institucionales; se inicia la constitución, al margen del Estado, de nuevas organizaciones que van a negociar o a concertar bajo un esquema relacional distinto al de las organizaciones de antaño. Sin que esto signifique que estamos frente a un modelo organizacional dominante, radicalmente distinto al modelo corporativo, la sociedad regional se mueve, se enfrenta, pone en práctica capacidades potenciales de acción social y política interiorizadas ya desde tiempo atrás y, aunque no es del todo claro por los protagonistas, los actores sociales se disputan la hegemonía de un proyecto de futuro.

Como todo proceso societal estas transformaciones no se producen por decreto ni se generalizan a la sociedad regional en su conjunto. Son procesos lentos, a veces casi imperceptibles y generalmente tienden a ser socavados por fuerzas estructurales y un tejido social inerte al cambio; no obstante, son procesos que están latentes e irrumpen en momentos de crisis social como movimientos antisistémicos. He aquí, algunas de sus manifestaciones:

El movimiento campesino e indígena. Durante las últimas dos décadas y media los campesinos e indígenas de Chiapas observan importantes procesos de cambio como individuos y como colectivos, haciendo suyas todas las oportunidades y posibilidades que el entorno les ofrece, para, en medio de las hostilidades y agresiones de ese mismo entorno, ser partícipes directos en la construcción de un futuro, distinto al que la historia parece condenarles. El mayor contacto que desde los años setenta establecen con otros sectores de la sociedad regional y nacional; la posibilidad de organizar y participar en eventos y encuentros campesinos e indígenas regionales y nacionales, les ha permitido la sistematización del conocimiento de los problemas que les aqueja, llegando incluso, dentro de su cotidianidad, a construir una discursividad y lectura propia sobre los factores causales de éstos; son procesos que han llegado a internalizarse y a formar parte de sus subjetividades y registros imaginarios, y aunque es imposible su análisis en términos cuantitativos, ha significado la ruptura de un marco relacional con los sectores económicos tradicionales, quienes considerándose como sus *bienhechores* o *protectores*, parecen poco dispuestos a adaptarse a la voluntad de cambio exigida por quienes en plena rebeldía, han optado por otros horizontes.

El despliegue del movimiento campesino e indígena de Chiapas durante las últimas tres décadas observa un repertorio cada vez más amplio de demandas y acciones tendentes a su consolidación y desarrollo; asimismo, tiende progresivamente a incorporar como espacios de acción y apoyo directo e indirecto a una diversidad de organizaciones y sectores sociales, mismas que explícita o implícitamente declaran su apoyo a las luchas campesinas e indígenas¹⁹. Los analistas sociales y los reportes periodísticos dan cuenta de una historia regional en donde desde los años setenta, las marchas, mítines, tomas de tierras, tomas de instalaciones gubernamentales, huelgas de hambre, bloqueos de carreteras,

¹⁹ Siendo el movimiento campesino quien ocupa la centralidad de los movimientos sociales en Chiapas, es comprensible que en torno a éste converjan fuerzas sociales como las Iglesias Católica y Protestante, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los partidos políticos y otras agrupaciones sociales y políticas.

plantones en espacios públicos, etcétera, se constituyen en prácticas y formas casi cotidianas de luchas emprendidas por campesinos e indígenas chiapanecos, que demandan la resolución de demandas como la regularización de la tenencia de la tierra, agilización de trámites agrarios, mejores condiciones de trabajo en las fincas, derecho a la sindicalización de los jornaleros agrícolas, libertad a campesinos presos, créditos, apoyo a proyectos productivos, cancelación de obras públicas, como fue el caso de la presa Itzantun, y otras demandas básicas²⁰.

En una primera etapa del movimiento campesino e indígena de Chiapas, el nivel organizativo se configura bajo un esquema de representación social cuya figura núcleo es la organización de "izquierda" y/o las organizaciones "opositoras", en grados distintos, al régimen. Esta distinción, que marca el carácter y la naturaleza de las relaciones que se establecen entre la organización y el Estado, entre la organización y las entidades formales de representación política como los partidos políticos y los sindicatos, y entre la organización y otras organizaciones "antisistémicas" de la sociedad civil, marca la direccionalidad de las estrategias asumidas por la diversidad de organizaciones involucradas en el movimiento campesino e indígena y los grados de contradicción con su entorno local.

Así, es posible anotar por ejemplo, como lo constatan algunos analistas de la cuestión, las diferencias muy marcadas que se observaron en esta etapa entre organizaciones de cobertura nacional pero con una alta presencia en Chiapas, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos (CIOAC), Línea Proletaria, y la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA); y entre éstas organizaciones citadas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). La CIOAC al asumir una discursividad y una práctica antisistémica, las relaciones con las estructuras de poder político y económico local son relaciones tensas y conflictivas, en donde la negociación si llega a establecerse, salvo raras excepciones, significa rupturas del orden estableci-

²⁰ Es importante hacer notar que para el caso de Chiapas, existe una cantidad importante de análisis referidos al movimiento campesino, entre los que destacan: Renard, 1985; Marion, 1987; López, 1990; Harvey, 1990; Esponda, 1994.

do; Línea Proletaria, también de cobertura nacional, observa un margen amplio de acción, desde demanda por las tierras hasta demandas por la producción, contemplando desde el principio la negociación y la concertación con el gobierno, preferentemente del nivel federal, como ocurrió con la política productivista de López Portillo; en la misma línea parecía encontrarse la UNORCA. En contraste, con una discursividad y una estrategia radical, la OCEZ-CNPA se declaraba independiente, antigubernista y antipartidista, enfocando sus energías en un campo de lucha por las demandas agrarias ancestrales iniciadas en Venustiano Carranza.

Es importante también destacar la configuración de la geografía física y social del movimiento campesino e indígena. La CIOAC inicia sus trabajos en torno a los peones acasillados de las fincas cafetaleras y ganaderas de la región Norte del estado, específicamente en los municipios de Simojovel, Huitiupán y El Bosque; posteriormente, dirige su potencial político a la zona cañera de Pujilic, municipio de la región Centro de la entidad, y desde mediados de los ochenta, a la región Fronteriza. Según registros de estudiosos sociales, en 1990 la CIOAC contaba con militantes en 27 municipios de las siete regiones de la entidad, con una presencia mayor en los municipios de las regiones Norte y Fronteriza.

En tanto, Línea Proletaria, desde que inicia su trabajo con las bases campesinas, concentró sus actividades en la Selva Lacandona, promoviendo las demandas de tierra y producción, logrando crear en 1980 la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (posteriormente Unión de Uniones y Sociedades de Producción Rural-ARIC Chiapas) y la Unión de Crédito "Pajal Ya Kactic". La amplitud de sus acciones, que involucra proyectos económicos y educativos, le han permitido ganar importantes recursos financieros de los gobiernos federal y estatal. La OCEZ tiene su origen en el espacio chiapaneco, aglutinando a comunidades indígenas y campesinos pobres de Los Altos, Centro, Norte y Fronteriza. En 1980 pasa a formar parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y en 1983 promueve la formación de la Coordinadora de Lucha de Chiapas logrando aglutinar a estudiantes, maestros y campesinos.

Es innegable que desde los setenta y ochenta el movimiento campesino e indígena chiapaneco enarbola de manera importante las banderas del reparto agrario y/o la lucha laboral por mejores condiciones de trabajo y protagoniza el drama sistemático de la represión²¹; sin embargo, paralelo a ello se ha sumado o anexado un movimiento, también campesino e indígena, cuya fuerza está orientada a la lucha por los espacios económicos, por el respeto a las diferencias étnicas o culturales y por el derecho a elegir a sus autoridades exigiendo una apertura democrática del sistema político, ya sea por la vía de la negociación y la concertación con las agencias del gobierno federal y/o estatal, o por la vía autónoma cuyas fuerzas motivacionales están generalmente sustentadas en principios morales, éticos y de injusticia por la privación de la subsistencia y de la identidad.

Los impactos de la crisis económica y política, visto líneas antes, han sido dramáticos para los campesinos y sus instancias organizativas en la medida en que casi la totalidad de los productores del sector social estaban agrupados u organizados en torno a estructuras corporativas e institucionales. Sin embargo, si bien inicialmente el sector social carecía de instrumentos organizativos propios para hacer frente a la crisis económica y a las políticas gubernamentales, existen, como veremos más adelante, experiencias organizativas en donde la cuantiosa energía social liberada ha encontrado o construido cauces propios hacia donde dirigir su potencial social y político.

Un ejemplo de estos nuevos procesos lo encontramos de nueva cuenta en el sector cafetalero chiapaneco. Un número significativo de productores del sector social pertenecientes a la CNC se incorporaron a las filas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)²² para emprender un trabajo

²¹ En los años de 1974 y 1976, son memorables las represiones en contra de las organizaciones que se forjaron al calor e la lucha por la tierra y por mejoras en las condiciones laborales. En 1972-74, guardias blancas y el Ejército hacen acto de presencia en el municipio de Carranza, y en los municipios en donde se asientan el conjunto de fincas cafetaleras de la zona norte; en 1976 el Ejército reprime y quema casas de indígenas tzeltales asentados en poblados del municipio de Ocosingo.

²² La CNOC representa a 65 mil campesinos cafetaleros del país; 20 mil de éstos corresponden a 39 organizaciones de Chiapas articuladas a dicha Coordinadora (CNOC, 1994; *El Financiero*, 10 de febrero de 1994).

que les ha resultado positivo, a pesar de los desequilibrios observados en los mercados internacionales del producto. Los logros alcanzados por los pequeños productores pertenecientes a ISMAM y a la Unión de Productores de la Frontera Sur (UNCAFESUR) constituyen sin duda alguna dos de las más importantes experiencias en el ámbito de la producción y comercialización de café, por el carácter y naturaleza de las respuestas asumidas ante la crisis y ante las políticas gubernamentales. Se trata de proyectos organizativos que más allá de la contingencia, se proponen, en el marco de los procesos productivos, superar la racionalidad autoconsuntiva de la economía campesina e indígena por la racionalidad de la economía de mercado que es la que rige el éxito o fracaso de sus esfuerzos productivos.

La Unión de Productores de Café de la Frontera Sur (UNCAFESUR) es una Sociedad Civil integrada por siete organizaciones con más de 2,100 socios, de las regiones Fronteriza y Selva. Iniciaron, casi paralelo a la crisis del sector cafetalero, una estrategia de trabajo y control integral del proceso cafetalero: los aspectos técnicos y sociales de la producción primaria, con un fuerte impulso a la producción de café orgánico; la transformación agroindustrial, contando para ello con un beneficio seco; y los aspectos de acopio y comercialización.

Por su parte, la organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla "San Isidro Labrador" (ISMAM) creada en 1988 en el seno del trabajo pastoral de la Iglesia Católica, está registrada como una Sociedad de Solidaridad Social y agrupa a cerca de 1000 indígenas de 13 municipios de la Región Sierra. Bajo una estructura organizativa sustentada en el trabajo colectivo, ISMAM ha sido una las organizaciones pioneras en el campo del café orgánico. El apoyo recibido por parte de la Iglesia Católica y los nexos con empresas europeas que le han abierto un mercado internacional selecto, han coadyuvado a su crecimiento cuantitativo y cualitativo.

Estas organizaciones, como muchas otras, aunque en una dimensión más pequeña, inauguran un nuevo marco de relaciones con el Estado y sus agencias de desarrollo. Dentro de sus estrategias de crecimiento está contemplado el aprovechar los servicios

y apoyos que el Estado ofrece pero sin que ello implique hipotecar su autonomía e independencia. En este sentido es importante señalar que un número importante de organizaciones sociales, surgidas al margen de la iniciativa gubernamental participaron en los programas de Solidaridad impulsados por la federación²³.

Es evidente que la centralidad en una parte importante del movimiento campesino lo sigue ocupando la demanda por la tierra, sin embargo, como hemos visto, desde los ochenta observamos una nueva expresión de éste; se trata de movimientos y prácticas cotidianas articuladas al ámbito de la producción, que se generalizan cada vez más creándose para su mayor eficacia mecanismos relacionales que les permite ejercer una presión mayor, frente a instituciones o situaciones coyunturales que obstaculizan su desarrollo.

El movimiento de las Comunidades Eclesiales de Base y la pastoral indígena. El movimiento social impulsado por dos de las tres Diócesis de la Iglesia Católica en Chiapas, empieza a dar sus primeros frutos. La discursividad teológica que enseña e impulsa a las comunidades una estrategia autogestiva para la resolución de sus problemas de sobrevivencia, distinta a la de las instituciones gubernamentales que inequívocamente deviene en *asistencialismo sexenal*, es apropiado e interiorizado por la población campesina e indígena. Desarrollo comunitario, educación popular y concientización histórica y cotidiana sobre los factores causales de las problemáticas más apremiantes que aquejan a las comunidades indígenas fueron contenidos cotidianos que los catequistas difundieron y socializaron en comunidades asentadas en los espacios más agresivos de la geografía chiapaneca.

El movimiento de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y la pastoral indígena, han sido movimientos que liberaron energías e iniciativas sociales en una población a la que generalmente se les pensó sin voluntad de cambio. Desde sus inicios este movimiento social ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte de grupos de poder local, quienes han acusado por todos los medios posibles

²³ A este respecto es importante anotar que organizaciones independientes como OIMI, ORIACH, OMIECH, COLPUMALL, y otras más, han participado de manera activa en el programa de Fondos Regionales de Solidaridad.

a los "incitadores" directos e indirectos del quiebre del orden social. Los conflictos y las querellas han persistido, con distintos grados de tensión, a lo largo de los últimos veinte años, mismos que corroboran la ausencia de espacio para el diálogo dada la magnitud de los intereses antagónicos en cuestión.

Como impactos significativos de este movimiento social podemos enumerar los siguientes: la formación de 7,822 catequistas y cerca de 300 agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal²⁴; 1,600 catequistas y 135 comunidades eclesiales de base, en la Sierra Madre, de la Diócesis de Tapachula; el impulso directo de organizaciones como ISMAM, Centro de Agroecología San Francisco de Asís y K'NAN CHOCH (Nuestra madre tierra) entre otros; el apoyo directo e indirecto en la creación de tiendas de autoconsumo y centros de atención médica; el apoyo a organizaciones sociales que tienden a la promoción y coordinación de proyectos productivos, de educación alternativa, de recuperación de prácticas culturales y derechos humanos; y el apoyo a las organizaciones campesinas y populares.

El Movimiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Otro bloque organizacional de la sociedad civil, cuyas movilizaciones visibles son más recientes, está representado por un conjunto de entidades autodenominadas *organizaciones no gubernamentales* (ONG). Sus ámbitos de acción son diversos: un grupo de éstas dirige sus acciones al desarrollo comunitario integral o a áreas específicas: producción agropecuaria, tecnologías tradicionales en el ámbito de la agricultura y la medicina, el rescate y fomento de las artesanías, salud, nutrición, educación popular, organización, cultural y tradición, etc. Estas entidades, presididas o impulsadas por profesionistas y luchadores sociales ha logrado un arraigo importante en las comunidades, no así en el entorno inmediato a la comunidad en donde sus actividades han propiciado generalmente, desconfianza y recelo.

Otro grupo de ONG se constituye como portadoras de movilizaciones sociales en ámbitos que, con excepción de ciertos trabajos en torno a la ecología, nunca antes en Chiapas formaron

²⁴ Que supera en mucho al personal de la Diócesis formado por 66 sacerdotes, 135 religiosas, 12 diáconos y 50 laicos (Aubry, en: *La Jornada*, 7 de junio de 1994).

parte de la agenda de lo público. Destacan: el **movimiento ecologista** impulsado por profesionistas de las ciencias naturales y de las humanísticas y por sectores sociales diversos, con una agenda de trabajo que abarca desde aspectos de investigación, movilizaciones en contra de decisiones gubernamentales, hasta acciones en torno a la educación y difusión de prácticas conservacionistas y turismo ecológico; el **movimiento de mujeres**, con una agenda de trabajo inédita en la entidad al abordar no sólo cuestiones de desarrollo comunitario y demandas en torno a la integración de la mujer a la vida económica y social en términos más igualitarios, sino también cuestiones relacionadas con problemas propiamente de género, como el maltrato, violaciones, acoso, etc.

El Movimiento de los Derechos Humanos. En la década de los ochenta también entran en escena los movimientos en torno a los derechos humanos y la impartición de justicia. Chiapas, en donde casi de manera cotidiana se violan los derechos humanos en sus capítulos básicos, se ha constituido en un espacio privilegiado para la acción de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. El elemento importante a destacar es la constitución de asociaciones de carácter estatal, es decir, creadas a partir de necesidades sentidas por algunos sectores de la sociedad civil regional y local. Así tenemos el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", el Centro de Apoyo para la Defensa de los Indígenas, la Asociación de Derechos Humanos Sur-Sureste y el Centro de Derechos Humanos de la Sierra Madre del Sur, que cuentan con el apoyo de otras organizaciones de similares y de agencias humanitarias de carácter local, nacional e internacional. De hecho muchas de las organizaciones de derechos humanos en Chiapas pertenecen o trabajan de manera articulada con organizaciones más amplias de carácter nacional o internacional, generalmente agrupadas en redes.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vittoria", Chiapas junto con Chihuahua y Tamaulipas está catalogada como una de las entidades en donde se presentan las mayores incidencias en violaciones de derechos humanos.

El Movimiento de defensa a los Refugiados Guatemaltecos.

Por el vínculo tan estrecho que tiene con los derechos humanos, cabe hacer mención de las movilizaciones que se generaron a partir de 1982 con la entrada de poco más de 40 mil guatemaltecos a territorio chiapaneco en busca de refugio y protección.

Al establecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)²⁵, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)²⁶ y de otras agencias humanitarias internacionales y nacionales, se sumaron un grupo importante de ONG, formadas en su mayoría por profesionistas y técnicos especializados, cuyos trabajos han sido diversos: asesorías, prestación de servicios profesionales en los ámbitos de la salud, educación, desarrollo agropecuario, desarrollo comunitario integral, investigación, etc. Es menester mencionar el papel destacado de la Iglesia Católica, quien desde antes de la llegada masiva de guatemaltecos a territorio chiapaneco, venía brindando apoyo humanitario a refugiados dispersos en la franja fronteriza que huían de la represión del vecino país, conformando para ello entidades especiales para su atención.

El despliegue de organizaciones surgidas o presentes en Chiapas, cuyas actividades iniciaron con la población de refugiados guatemaltecos ha sido impresionante: el Comité Cristiano para Refugiados, la Confederación Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo de Comunidades Etnicas RUNUJEL JUNAM, Organización de Mujeres Guatemaltecas Refugiadas "Mamá Maquín", el Centro de Investigación y Acción Para la Mujer de América Latina (CIAM), el Centro de Investigaciones, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH), el

²⁵ La COMAR es una entidad que depende de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Trabajo, cuyas funciones son de coordinación de las actividades realizadas para la población refugiada.

²⁶ De acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1983, se aprueba y se promulga el establecimiento de una Oficina de ACNUR en México, con los propósitos explícitos de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados.

Consejo Nacional de Desplazados (CONDEG), Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CESC), PRODUSSEP, ARDIGUA y Centro de Investigación en Salud de Comitán. La mayoría de estas organizaciones han formado parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda a Refugiados en México (CONONGAR)²⁷, y se establecieron en los centros urbanos cercanos a sus áreas de trabajo como las ciudades de Comitán de Domínguez de la región Fronteriza, San Cristóbal de Las Casas de la Región Altos y Motozintla, municipio de la región Sierra.

El Movimiento de las Iglesias Protestantes. Y qué decir de los movimientos religiosos, cuyo conflicto más visible gira en torno a las expulsiones de poco más de 33 mil evangélicos de sus comunidades de origen. Aunque las primeras conversiones al credo evangélico en Chiapas data de principios de los sesenta, es en los setenta y ochenta cuando la población conversa se incrementa de manera significativa, de tal manera que, de acuerdo al INEGI, para 1990 Chiapas pasa a ser la entidad federativa menos católica del país.

La *Iglesia Nacional Presbiteriana* y los *Presbiterianos Independientes* son los más antiguos y los más numerosos (tienen presencia en Chiapas desde los años veinte); le siguen en importancia las denominaciones *Pentecosteses (Asambleas de Dios, Carismáticas, Elim, Eunecer)*, los *Adventistas del Séptimo Día*, los *Sabáticos* y los *Testigos de Jehová*. Aunque de menor importancia, también figuran en Chiapas otras iglesias o denominaciones como los *Mormones*, los *Bautistas*, la *Iglesia del Nazareno*, la *Iglesia Cristiana* o *Seguidores de Cristo*, y sectas carismáticas pseudo-científicas o fundamentalistas como la *Iglesia de Dios*, la *Iglesia Centroamericana*, la *Luz del Mundo*, *Príncipe de Paz*, *Verdadera Iglesia de Cristo*, *Alfa y Omega* entre otros.

²⁷ La CONONGAR se estructura formalmente en 1989, después de 8 años de trabajo de coordinación; es miembro activo de la Asociación Regional de Coordinaciones Nacionales de ONG que trabajan con refugiados, desplazados y retornados, integrada por: México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y los países del Caribe. Se define como una instancia de análisis e intercambios de experiencias, que difunde la situación de los refugiados y promueve e interviene en la defensa de los mismos (CONONGAR, 1992).

Finalmente, cabe hacer mención de una de las movilizaciones más importantes de la entidad y que tiene como escenario a la región de Los Altos de Chiapas. Nos referimos al movimiento de los indígenas expulsados de sus comunidades aparentemente por motivos religiosos. Chamula es el municipio de referencia, aunque el fenómeno de las expulsiones y de las movilizaciones cubre a una parte importante de los municipios alteños. La creación del *Comité de Defensa de los Amenazados, Perseguidos y Expulsados de Chamula* es el antecedente inmediato del *Consejo de Representantes Indígenas de Los Altos de Chiapas* (CRIACH) constituido en septiembre de 1984 en San Cristóbal de Las Casas por los representantes de las colonias de expulsados asentados en San Cristóbal y en el municipio de Teopisca.

CONSIDERACIONES FINALES

En la crisis chiapaneca subyacen fenómenos y procesos que en la coyuntura se tornan irreconciliables: El Estado y sus instituciones enfrentan la presencia simultánea de tensiones que amenazan con destruir los elementos estructurantes que le han dado soporte a sus funciones básicas. Ante las lealtades en conflicto, entran en crisis los medios que en la práctica permitieron establecer los arreglos políticos de regulación y resolución de conflictos; arreglos que instituyeron estructuras y formas de poder y dominación generalmente de corte autoritario pero con una gran fortaleza de continuidad histórica. Frente a ello, tenemos la erosión de las organizaciones de representación política y a una sociedad civil polarizada, en franco rechazo a la alteridad; por si ello fuera insuficiente, la crisis no sólo manifiesta una exasperación por expectativas políticas no satisfechas sino también por la privación cotidiana de las condiciones mínimas de reproducción biológica y social de los sectores mayoritarios de la sociedad.

Es evidente que uno de los nudos fundamentales del problema actual tiene su matriz en la esfera de la economía, cuya estructura agroproductiva de corte tradicional es golpeada por las políticas de apertura comercial y por un comportamiento negativo en los mercados internacionales y nacional. La magnitud de la crisis

económica en una entidad como Chiapas en donde su población en gran medida depende de los productos agropecuarios afectados, explica no sólo la emergencia del movimiento zapatista y la adhesión y simpatía de productores del sector social inicialmente al margen del movimiento; sino también, el distanciamiento y las serias contradicciones que se gestan entre el gobierno central y un número cada vez más importante de productores y empresarios del sector privado quienes han sido directamente afectados.

Pero la crisis económica y social se externa en su dimensión política y es ésta la única capaz de generar un proceso de cohesión y consenso hoy erosionado; sin embargo, la primacía de referentes culturales negativos hacia el *sistema político institucional* ensombrece el horizonte inmediato y dificulta la definición de una ruta hacia la cual transitar. La sobrevaloración del potencial de la *sociedad civil*, como el nuevo paradigma de hacer política y portadora *per se* de cambios por un lado y, por otro, el argumento en el uso de la fuerza legal apelando a la ficción de un "estado de derecho", están lejos de converger y se tornan irreconciliables. Visto de esta manera, pareciera que Chiapas se encuentra entre luz y sombra, atrapada entre una sociedad en decadencia y en algo que no termina de emerger, que se niega como proyecto de sociedad inclusiva capaz de generar y articular consensos.

Se puede decir que las perspectivas para la construcción de un nuevo consenso social, sobre bases sociales y económicas distintas a las que hasta hoy existen, tiene que ver con un proyecto político que permita modificar la correlación de fuerzas internas. Las negociaciones que han venido dándose son una vía importante para transitar hacia la construcción de ese proyecto de futuro, pero es fundamental no perder de vista el imperativo de un cambio en el conjunto de la sociedad, no solamente en los sectores indígenas y campesinos, sino también en las clases medias, en los empresarios, en el campo y en la ciudad, en las instituciones, en los partidos políticos y otros órganos de representación política. Las expectativas generadas por el movimiento zapatista deberán trascender al conjunto de la sociedad, de lo contrario se correría el riesgo de generar una entidad atomizada entre entidades sociales irreconci-

liables. Chiapas y su sociedad mayoritaria están ávidas de alcanzar una utopía, una dimensión esperanzadora, en donde los compromisos, el nuevo pacto social devenga en original y creativo capaz de potenciar el desarrollo de los distintos sectores de la sociedad regional y sus diversas manifestaciones culturales aun cuando éstas sean divergentes.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Bobbio, N. y Matteucci, Nicola**, 1988. *Diccionario de Política*, Tomo I y II, Siglo Veintiuno, México.
- Bancomer, 1992. *Panorama Económico*, 4º. Bimestre, México.
- Betancourt, D. y López, J**, 1993. "El mercado internacional del café en la coyuntura actual", en: Villafuerte, S. Daniel (Coord.), 1993. *El café en la frontera Sur*, Serie Nuestros Pueblos, Instituto Chiapaneco de Cultura, Depto. de Patrimonio Cultural e Investigación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Córdova, Arnaldo**, 1976. *La política de masas del Cardenismo*, 2a. edición, Editorial Era, México.
- Diario Oficial de la Federación*, 6 de marzo de 1972.
- El Financiero*, 3 de septiembre de 1990.
- El Financiero*, 10 de febrero de 1994.
- Fernández L. y Tarrío M.**, 1983. *Ganadería y Estructura Agraria en Chiapas*, Colección Ensayos, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- García A. Ma. del Carmen y López M. Antonio**, 1992. "Políticas y programas de desarrollo rural en Los Altos de Chiapas", en: *Memorias del Primer Congreso Internacional de Mayistas*, UNAM, México.
- García A. M.C., y Pontigo, S. J. L.** 1993. "La política cafetalera y sus efectos en las organizaciones de productores del sector social del Soconusco", en: Villafuerte, S. Daniel (Coord.), 1993. *El café en la frontera Sur*, Serie Nuestros Pueblos, Instituto Chiapaneco de Cultura, Depto. de Patrimonio Cultural e Investigación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Gobierno del Estado de Chiapas, 1992. *Nueva Legislación Ecológica del Estado de Chiapas*, Talleres Gráficos del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Habermas, Jürgen**, 1991. *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina.
- Habermas, Jürgen**, 1993. *Ensayos Políticos*, Ediciones Península, Barcelona, España.

- Habermas, Jürgen**, 1993. *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*, ediciones Rei-México, México.
- Harvey, Neil**, 1990. "La lucha por la tierra en Chiapas: estrategia del movimiento campesino", en: Zermeño, Sergio y Cuevas, Aurelio (coord.). 1990. *Movimientos sociales en México*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, México.
- INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990.
La Jornada, 16 de febrero de 1992.
La Jornada, 7 de julio de 1994.
- López, J. y Villafuerte, D**, 1992. "La producción de maíz en Chiapas ante el Tratado de Libre Comercio", en: El Sector Agropecuario Mexicano Frente al Tratado de Libre Comercio, CIESTAAM-UNAM-Juan Pablos Editor, México.
- Louis, Benjamin Thomas**, 1990. *El camino a Leviatán. Chiapas y el Estado mexicano, 1891-1947*, Ediciones CONACULTA, México.
- Morales, Jesús**, 1992. "El Congreso Indígena de Chiapas. Un testimonio", en: *Anuario 1991*, Instituto Chiapaneco de Cultura, Departamento de Patrimonio Cultural e Investigación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Marión, M.**, 1987. "Pueblos de Chiapas: una democracia a la defensiva", en *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 49, Núm. 4, octubre-diciembre, IIS-UNAM, México.
- Renard, Cristina**, 1985. Historia de la comunidad de San Bartolomé de los Llanos, Chiapas, tesis de maestría, Facultad de Filosofía-UNAM, México.
- SAG, 1936. Ley General de Asociaciones Ganaderas.
- Tironi, E. y Lagos, R.**, 1991. "Actores sociales y ajuste estructural", en: *Revista de la Cepal* No. 44, agosto de 1991, Santiago de Chile.
- Ocampo, Rigoberto** (compilador), 1992. *Teoría del Neocorporativismo. Ensayos de Philippe C. Schmitter*, Universidad de Guadalajara, Colección Laberinto de Cristal, Guadalajara, Jal., México.
- Villafuerte**, 1994. Veda forestal, Tratado de Libre Comercio y Alternativas Comunitarias en Chiapas, Mimeo., México.
- Villafuerte, S. y García A**, 1994. "Los Altos de Chiapas en el contexto del neoliberalismo: causas y razones del conflicto indígena", en: Silvia Soriano (Coord.), 1994. *A propósito de la insurgencia en Chiapas*,

ADICH., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Villafuerte S. Daniel y García A. Ma. del Carmen, 1995. "Las sombrías perspectivas para los productores de maíz en Chiapas", en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Epoca, Año 5o., Núms. 11 y 12, Enero-diciembre, México.